

Publicar en educación en revistas Q1/Q2: barreras estructurales, desarrollo editorial y políticas en México y América Latina

Publishing in Q1/Q2 education journals: structural barriers, journal development, and policies in Mexico and Latin America

Karla Karina Ruiz Mendoza

Universidad Autónoma de Baja California, México
<https://orcid.org/0000-0001-8978-8364>
ruiz.karla32@uabc.edu.mx

Héctor Manuel Rodríguez-Figueroa

Universidad Autónoma de Aguascalientes, México
<https://orcid.org/0000-0003-1314-4073>
manuel.rodriguez@edu.uaa.mx

RESUMEN

Este artículo examina la distribución desigual de oportunidades para publicar en revistas Q1/Q2 del campo educativo, con énfasis en México y contraste con América Latina, en un escenario marcado por metrificación, digitalización y concentración editorial. Se describen barreras económicas (financiamiento y APC), institucionales (infraestructura de investigación, apoyos de escritura y redes), lingüísticas (hegemonía del inglés) y laborales (carga docente y aceleración del trabajo académico). Se incorpora la dimensión editorial regional: muchas revistas latinoamericanas operan bajo modelos de acceso abierto no comercial y, al mismo tiempo, enfrentan requisitos técnicos de indexación e internacionalización que incrementan costos de profesionalización, edición y traducción. El análisis se basa en revisión integrativa de literatura y en un examen documental del marco normativo mexicano reciente (Secihti y Reglamento del SNII). Se sostiene que la publicación Q1/Q2 opera como capital cultural institucionalizado y que, en ciertos subcampos cuantitativos, expectativas recurrentes (muestras amplias, diseños multi-sitio, modelación multinivel y potencia) funcionan como filtros estructurales que afectan con mayor fuerza a universidades estatales. Por último, se propone una agenda de capacidades: consorcios interinstitucionales, acceso ético a datos administrativos, evaluación responsable, fortalecimiento de revistas y condiciones de ciencia lenta para reducir desigualdad territorial sin bajar estándares.

Palabras clave: publicación científica; evaluación académica; régimen de métricas; desarrollo editorial; América Latina.

ABSTRACT

This essay examines why opportunities to publish in Q1/Q2 education journals are uneven across countries and institutions, focusing on Mexico and situating it within the Latin American region. In a landscape shaped by metric-based assessment, digitalization, and publisher concentration, we identify economic barriers (funding and article processing charges), institutional barriers (research infrastructure, writing support, and collaboration networks), linguistic barriers (English dominance), and labor constraints (teaching load and accelerated academic work). We add an often-overlooked dimension: Latin American journals face internationalization pressures and technical indexing requirements that raise translation, editing, and professionalization costs. The argument is developed through an integrative literature review and documentary analysis of the current Mexican policy framework (Secihti and the SNII regulation). We contend that Q1/Q2 publishing functions as convertible symbolic capital and that, in quantitative subfields, recurring expectations—large samples, multi-site designs, multilevel modelling, and power justification—act as structural filters that disproportionately affect state universities with limited access to data, software, networks, and editorial support. We conclude with a policy and institutional agenda centered on inter-institutional consortia, governed access to administrative education data, editing and translation support for both authors and journals, responsible research assessment, and “slow science” conditions aimed at reducing territorial inequalities without weakening rigor.

Keywords: scientific publishing; research assessment; metrics regime; journal development; Latin America.

INTRODUCCIÓN

La publicación en revistas indexadas ubicadas en cuartiles superiores (Q1/Q2) se ha convertido en un requisito de facto para acceder a reconocimiento, financiamiento, movilidad académica y, en ciertos contextos, estabilidad laboral. En ciencias sociales y educación, este imperativo reordena la investigación desde su planificación hasta su validación: además de lo que se investiga, importan los circuitos por los que circula y los estándares de evidencia, legibilidad y forma editorial que esos circuitos imponen. Sin embargo, el ingreso a las arenas de “alto impacto” no se reparte por igual. Se encuentra mediado por desigualdades económicas (financiamiento y costos de publicación), institucionales (infraestructura editorial, apoyos a la investigación y redes), lingüísticas (hegemonía del inglés) y laborales (carga docente y administrativa, junto con la aceleración del trabajo académico) (Lillis & Curry, 2010; Salager-Meyer, 2008; Mountz et al., 2015).

A escala internacional, la producción científica se inscribe en una economía política editorial caracterizada por concentración empresarial, regímenes de suscripción y una expansión heterogénea del acceso abierto. En ese ecosistema,

ciertas revistas operan como nodos de gatekeeping: controlan el acceso al registro legítimo del conocimiento y, con ello, inciden en trayectorias individuales y prestigios institucionales (Larivière et al., 2015). La transición hacia modelos de acceso abierto financiados por cobros a la publicación (article processing charges, APC) desplaza la barrera del “pago por leer” al “pago por publicar”, con exclusiones diferenciadas según recursos disponibles (Kwon, 2022; Rodrigues et al., 2022).

En educación, donde la investigación empírica suele requerir trabajo de campo, negociación con escuelas y ciclos prolongados de levantamiento y análisis, estas barreras se combinan con un régimen de métricas que premia rapidez y volumen, en tensión con procesos investigativos lentos y situados (Slow Science Academy, 2010; Stengers, 2011).

Este ensayo añade otra arista: la desigualdad no se produce sólo del lado de la autoría, sino también del lado de la infraestructura editorial regional. Muchas revistas latinoamericanas —incluidas las de educación— enfrentan obstáculos para profesionalizarse, sostenerse y posicionarse en índices internacionales, por recursos limitados, exigencias técnicas de indexación y presiones de internacionalización (publicar en inglés o en formato bilingüe), con costos crecientes de traducción y edición (Cabrera & Saraiva, 2022; Packer, 2014, 2024; Rodrigues & Abadal, 2014). Cuando esas revistas quedan subvaloradas o rezagadas, se refuerza la dependencia de circuitos editoriales centrales y, con ello, la segmentación del campo académico descrita para América Latina (Beigel, 2014; Vessuri et al., 2014).

Asimismo, en educación existe una dimensión metodológica que agudiza las desigualdades de publicación: en un segmento de revistas Q1/Q2 —sobre todo las orientadas a investigación cuantitativa con aspiraciones de generalización y modelación avanzada— suelen esperarse justificaciones de potencia estadística, muestras amplias y/o multi-sitio, y tratamiento explícito de la estructura jerárquica de los datos (estudiantes en aulas y escuelas), por ejemplo mediante modelos multinivel (American Educational Research Association [AERA], 2006; Hedges & Rhoads, 2010; Maas & Hox, 2005). Estos estándares pueden ser adecuados para ciertas preguntas, pero no son neutros en términos institucionales: requieren convenios, infraestructura, software especializado, equipos técnicos y acceso a marcos muestrales amplios, condiciones concentradas en instituciones centrales.

En México, la discusión adquiere relevancia por la combinación de incentivos evaluativos y desigualdad territorial. A partir de 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) asume la rectoría del sector, tras un tránsito normativo e institucional: de Conacyt a Conahcyt con la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Diario Oficial de la Federación, 2023) y de Conahcyt a Secihti mediante reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación, 2024), con inicio de funciones el 1 de enero de 2025 (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación [Secihti], 2024). En esta arquitectura, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) se regula mediante un reglamento publicado en marzo de 2025 (Secihti, 2025) y se apoya en un marco legal disponible en el sitio institucional (Secihti, s. f.). Dado que el SNII participa en la producción de incentivos, la pregunta por publicar en Q1/Q2 desborda lo académico: involucra política pública, gobernanza y equidad territorial.

El objetivo de este ensayo es analizar por qué la publicación en revistas Q1/Q2 de educación opera como un umbral desigual y cómo dicha desigualdad se configura por la interacción entre economía política editorial, capital académico (cultural y simbólico), condiciones laborales vinculadas al tiempo, políticas de evaluación y las dificultades estructurales que enfrentan las revistas latinoamericanas para profesionalizarse e indexarse.

Con ese fin, el texto se organiza en tres lentes analíticos. El primero recurre a la economía política de la publicación científica para explicar concentración editorial, costos, regímenes de acceso y circuitos de legitimidad (Larivière et al., 2015; Kwon, 2022). El segundo retoma la teoría del campo académico y de los capitales —cultural, social y simbólico— para interpretar la publicación como mecanismo de estratificación y conversión de prestigio en oportunidades (Bourdieu, 1986). El tercero incorpora la crítica de la ciencia lenta para discutir la aceleración y la cultura de métricas como formas de gobierno del trabajo académico que producen desigualdad temporal (Slow Science Academy, 2010; Mountz et al., 2015; Stengers, 2018).

El análisis se apoya en una revisión integrativa de literatura internacional y latinoamericana sobre desigualdad en publicación, evaluación, trabajo académico y desarrollo editorial regional. Además, incorpora un análisis documental del marco normativo mexicano vigente a inicios de 2026: Ley General HCTI (Diario Oficial de la Federación, 2023), decreto de reforma a la LOAPF que crea/incorpora la Secihti (Diario Oficial de la Federación, 2024), reglamento del SNII (Secihti, 2025) y marco legal institucional del SNII disponible en el sitio oficial (Secihti, s. f.).

En consecuencia, la tesis central sostiene que la dificultad para publicar en revistas Q1/Q2 en educación no deriva ante todo de “talento individual” o de una “calidad intrínseca” aislada, sino de un ensamblaje de condiciones estructurales que distribuye de forma desigual los recursos necesarios para producir, escribir y legitimar investigación bajo estándares dominantes. En ese ensamblaje, la publicación Q1/Q2 funciona como capital cultural institucionalizado de alta convertibilidad —financiamiento, contratación, ascensos y redes— y, por tanto, como mecanismo de estratificación (Bourdieu, 1986).

Economía política del alto impacto y régimen de métricas

La publicación científica opera en un mercado donde reputación editorial, visibilidad y control del acceso se articulan con intereses comerciales y con formas de poder fáctico y simbólico. La evidencia bibliométrica muestra una alta concentración: un grupo reducido de editoriales controla una parte significativa de la literatura científica, con efectos en precios, acceso y gobernanza del conocimiento (Larivière et al., 2015). En educación, este patrón se traduce en estándares formales, tiempos editoriales, expectativas retóricas y barreras de entrada que, aunque se presentan como “criterios de calidad”, también expresan lógicas de mercado y jerarquías centro-periferia.

En ciencias sociales, la concentración resulta sensible porque el valor del conocimiento se disputa en “circuitos de consagración” donde el prestigio se acumula y se distribuye de modo desigual. La publicación no es sólo comunicación: también es un dispositivo de acreditación. Quien controla esos canales incide en qué debates cuentan, qué métodos se consideran preferibles y qué problemas se vuelven “relevantes” para audiencias globales; en suma, delimita quién puede hacer circular discursos con autoridad (Sinha, 2003).

Un eje de desigualdad contemporánea es el desplazamiento de barreras hacia modelos de acceso abierto financiados por APC. Si bien el acceso abierto busca ampliar la disponibilidad para lectoras y lectores, su implementación comercial puede restringir la publicación: cuando el costo recae en la autoría o en las instituciones, quienes carecen de fondos quedan excluidos o dependen de exenciones (Kwon, 2022). En regiones con menor financiamiento, emerge una paradoja: el conocimiento se abre para leer, pero se dificulta para escribir y colocar en circuitos prestigiosos.

Rodrigues et al. (2022) analizan los APC como barrera para regiones de ingresos medios y bajos y subrayan que la desigualdad no es sólo monetaria: también es institucional, porque exige estructuras administrativas para tramitar pagos, justificar gastos y gestionar fondos. En educación, a ello se suman costos indirectos de producción: levantamientos multi-sitio, instrumentación, formación de equipos, licencias de software y procesos éticos. Así, la inequidad atraviesa toda la cadena: desde producir datos hasta traducirlos y difundirlos en inglés académico.

Los cuartiles (Q1–Q4) clasifican revistas según su posición relativa dentro de una categoría temática: Q1 corresponde al primer 25% y Q2 al tramo 25–50% del ranking (Clarivate, 2017). Dos precisiones importan. Primero, los cuartiles son métricas del contenedor (la revista), no del contenido (el artículo). Segundo, cuando se usan para evaluar personas, instituciones o programas, se convierte una métrica agregada en un indicador sustituto de calidad individual, con el riesgo de distorsionar incentivos y profundizar inequidades.

Movimientos de evaluación responsable como DORA (2012) y el Leiden Manifesto (Hicks et al., 2015) advierten que juzgar trayectorias por métricas de revista es débil desde el punto de vista metodológico y riesgoso en términos políticos: reorienta agendas hacia lo medible y estandarizable, penaliza contribuciones locales o de largo aliento y amplifica desigualdades preexistentes. En educación, esas distorsiones pueden resultar graves, porque el valor social de la investigación no siempre coincide con la “citabilidad” internacional y porque muchos problemas relevantes son contextuales.

Desde la sociología del campo académico, publicar en revistas prestigiosas permite acumular capital cultural institucionalizado que se traduce en capital simbólico: prestigio reconocido como legítimo por comunidades evaluadoras, instituciones y políticas de financiamiento. Ese capital simbólico se convierte, a su vez, en capital económico (estímulos, fondos, mejores condiciones) y capital social (redes, colaboraciones), reforzando trayectorias ya favorecidas y reproduciendo mecanismos de selección (Bourdieu, 1986; Bourdieu y Passeron, 1996).

En educación, el capital cultural que permite que un manuscrito sea percibido como “publicable” incluye dominio de teorías dominantes, manejo de géneros discursivos (introducción–problema–aporte, estado de la cuestión, discusión), competencias metodológicas y estándares de reporte, así como la capacidad de situar lo local en debates transnacionales. La conversión de ese capital cultural en capital simbólico depende, además, de condiciones institucionales: tutoría de escritura, apoyo estadístico, acompañamiento editorial, traducción y tiempo de descarga. Sin esas condiciones, la investigación puede existir, pero no logra transformarse en un producto reconocido por los circuitos dominantes.

Esta perspectiva evita lecturas moralizantes (“no publican porque no se esfuerzan”) y permite entender el “alto impacto” como un recurso distribuido de modo desigual: la competencia se da, ante todo, por condiciones de posibilidad.

El planteamiento de la ciencia lenta parte de una premisa sencilla: pensar, dudar, contrastar y construir problemas relevantes demanda tiempo. El *Slow Science Manifesto* (Slow Science Academy, 2010) y los trabajos de Stengers (2011, 2018) cuestionan la captura del trabajo científico por lógicas de urgencia y productividad. Mountz et al. (2015) muestran que la aceleración no es neutral: desplaza costos hacia quienes tienen más docencia, mayor precariedad o mayores responsabilidades de cuidado, y reduce la posibilidad de investigación de largo aliento.

En educación, la desigualdad temporal tiene efectos epistémicos: condiciona qué problemas pueden investigarse,

con qué profundidad y bajo qué criterios éticos. Investigar escuelas y comunidades implica negociación institucional, consentimiento, cuidado y, a menudo, ciclos largos. Cuando la evaluación premia volumen y rapidez, incentiva la fragmentación de productos ("salami slicing") y penaliza proyectos amplios, longitudinales, intensivos o participativos. Este sesgo se vuelve crítico en universidades estatales, donde la docencia masiva y la administración consumen buena parte de la jornada.

La ciencia lenta no propone renunciar al rigor ni celebrar baja productividad; propone reconocer que calidad y pertinencia requieren condiciones humanas. En contextos periféricos, defender tiempo equivale a defender la posibilidad de producir conocimiento situado con estándares altos.

La hegemonía del inglés constituye una barrera estructural para comunidades no anglófonas. Lillis y Curry (2010) describen la "política de publicar en inglés" como práctica que reordena carreras y genera trabajo adicional invisible: reescrituras, traducciones y negociación de expectativas retóricas. Hanauer y Englander (2011) cuantifican la carga de escribir en segunda lengua para científicas y científicos mexicanos y muestran costos de tiempo y esfuerzo que no aparecen en las métricas. Amano et al. (2021) discuten la subrepresentación del conocimiento no inglés y sostienen que las barreras lingüísticas no son sólo comunicativas, sino epistémicas: afectan qué conocimiento circula y se legitima.

En educación, este sesgo se intensifica porque muchos objetos de estudio son contextuales (políticas curriculares, prácticas escolares, desigualdades territoriales) y requieren "traducción epistemológica": explicar instituciones, historia y cultura escolar a audiencias externas. Sin apoyo institucional, esa traducción consume capital cultural especializado y tiempo adicional, reforzando la desigualdad.

Exigencias metodológicas en educación y desigualdad territorial: México y América Latina

En una fracción importante de la investigación educativa cuantitativa, la aspiración de publicar en Q1/Q2 se asocia con expectativas de evidencia que demandan muestras amplias y/o diseños multi-sitio, sobre todo cuando se busca inferencia generalizable, análisis multivariado robusto o modelación multinivel. Esta afirmación requiere matiz: no todas las revistas Q1/Q2 exigen muestras masivas ni todas privilegian el cuantitativismo; existen revistas de alto cuartil con tradición cualitativa, histórica o teórica. Con todo, en subcampos como evaluación de programas, efectividad escolar, economía de la educación o medición, es frecuente que los dictámenes soliciten: (a) justificación explícita de tamaño de muestra y potencia, (b) tratamiento del agrupamiento (clustering) y (c) transparencia en estándares de reporte (AERA, 2006; What Works Clearinghouse [WWC] et al., 2020).

En educación, la estructura jerárquica de los datos es central: el alumnado está "anidado" en aulas y escuelas. La correlación intraclase (ICC) reduce la potencia efectiva; por ello, el tamaño muestral no se define sólo por el N total, sino por el número de escuelas, el número de aulas y la distribución de estudiantes por unidad. Maas y Hox (2005) discuten tamaños suficientes para modelación multinivel; Snijders (2005) aborda potencia y tamaño de muestra en modelos multinivel; y Hedges y Rhoads (2010) sistematizan análisis de potencia en investigación educativa. El punto no es tecnificar el debate, sino subrayar su dimensión política: si publicar en circuitos Q1/Q2 exige, en muchos casos, acceso a múltiples escuelas y a datos comparables, entonces el "mérito metodológico" se entrelaza con convenios, recursos y capacidades institucionales.

Este mecanismo genera selectividad estructural. Instituciones con redes amplias y convenios con autoridades educativas pueden construir marcos muestrales grandes y multi-sitio con ventaja relativa; universidades estatales con menor infraestructura y convenios limitados enfrentan costos de acceso más altos. Así, el estándar metodológico puede operar como filtro territorial: no por falta de rigor potencial, sino por falta de condiciones para sostenerlo a escala.

En México, el marco institucional reciente reconfigura el vocabulario y la arquitectura de la política científica. La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Diario Oficial de la Federación, 2023) marca la reorganización del sector (Conacyt → Conahcyt), y el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación, 2024) eleva la conducción al rango de secretaría (Secihti), con inicio de funciones en 2025 (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación [Secihti], 2024). En esa institucionalidad, el SNII se regula mediante un reglamento publicado en 2025 (Secihti, 2025) y cuenta con un marco legal disponible en el sitio institucional (Secihti, s. f.).

Esta reconfiguración importa porque dispositivos de evaluación como el SNII no sólo registran trayectorias: producen incentivos que reordenan prioridades de publicación. Aguado-López y Becerril-García (2021) analizan la transformación del dispositivo evaluativo del SNI/SNII y muestran procesos de estandarización y orientación hacia una "corriente principal" que tensionan la diversidad de prácticas en humanidades y ciencias sociales. Ese desplazamiento suele jerarquizar ciertas formas de producción —por ejemplo, metodologías cuantitativas y artículos en circuitos internacionales— y puede desvalorizar intervenciones, investigación-acción y metodologías horizontales.

Desde otro campo, Neff (2018) advierte que los incentivos de publicación pueden erosionar la utilidad social de la ciencia al reorientar agendas hacia aquello que maximiza una producción medible. En educación, la tensión se vuelve visible cuando el prestigio (capital simbólico) se concentra en contenedores editoriales específicos, mientras problemas territoriales críticos demandan investigación situada, colaboración con escuelas, intervenciones educativas y tiempos largos. Para ordenar la desigualdad de publicación en México, conviene distinguir —como ideal-tipo— entre:

- a) universidades grandes/nacionales/federales y centros con alta infraestructura de investigación.
- b) universidades estatales y otras instituciones locales con misión docente fuerte y recursos restringidos.

Las primeras tienden a concentrar capital organizacional: equipos consolidados, unidades de apoyo a la investigación, bibliotecas robustas, redes de coautoría, acceso a financiamiento competitivo y convenios de datos. Las segundas enfrentan restricciones presupuestales, apoyos editoriales discontinuos, menor infraestructura de datos y cargas docentes y administrativas intensivas. En educación, esta diferencia resulta decisiva: los estudios multi-sitio con potencia suficiente y modelación multinivel demandan acceso a múltiples escuelas y coordinación sostenida. Si la evaluación exige resultados homogéneos ("publique en Q1/Q2") sin reconocer asimetrías de capacidad, la política puede reforzar el centralismo: el capital simbólico se acumula en pocas instituciones y se limita la movilidad científica desde periferias estatales.

La comparación regional muestra que el problema no es exclusivo de México, sino sistémico. Beigel (2014) analiza la publicación desde la periferia como un conjunto de circuitos segmentados: conviven canales internacionales "mainstream" con circuitos regionales que cumplen funciones científicas y sociales distintas, pero tienden a recibir menor reconocimiento en regímenes evaluativos importados. En educación, este marco es útil porque la investigación regional puede aportar a políticas públicas y formación docente, aunque sea subvalorada por indicadores diseñados para otras lógicas disciplinares y lingüísticas. Reconocer la pertinencia de los dominios de publicación implica atender el tema, la comunidad lectora y los usos sociales del conocimiento (Sinha, 2003).

En América Latina, la discusión sobre evaluación y bibliodiversidad ha cobrado fuerza. FOLEC-CLACSO (2021) propone herramientas para promover bibliodiversidad y defender el multilingüismo y sostiene que la calidad no se reduce a métricas comerciales; por ello, la evaluación debe contextualizarse y reconocer diversidad de formatos, lenguas y agendas. En la misma dirección, la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta plantea principios de apertura y equidad para disminuir desigualdades en participación y circulación del conocimiento (UNESCO, 2021).

El contraste sugiere una tensión: mientras los sistemas de evaluación empujan hacia la "corriente principal" (publicar en inglés y en Q1/Q2), la región ha construido infraestructuras de acceso abierto no comercial y prácticas editoriales orientadas a la circulación pública del conocimiento. La pregunta de política es si estos ecosistemas se consolidan como alternativas legítimas —con reconocimiento— o quedan confinados como circuitos "secundarios" en la lógica evaluativa.

La digitalización amplía opciones de acceso y circulación (repositorios, preprints, plataformas de revistas, métricas alternativas), pero también intensifica la economía de la atención y reconfigura barreras. Por un lado, el acceso abierto y la circulación digital pueden aumentar el alcance social del conocimiento; Alperin (2015) muestra que el acceso abierto latinoamericano favorece circulación pública más allá de la academia. Por otro, el mercado editorial y los APC pueden convertir la apertura en una nueva exclusión: la ciencia se abre para leer, pero se cierra para publicar (Kwon, 2022).

Además, visibilidad digital no equivale a legitimidad. Una universidad estatal puede difundir un estudio en repositorio con amplio alcance, pero si la evaluación reconoce ante todo Q1/Q2, esa circulación no se traduce en capital académico, cultural institucionalizado, simbólico ni económico. De ahí una paradoja: más "voz" en términos de difusión, sin garantías de mayor "escucha" en términos de reconocimiento institucional.

Desarrollo editorial regional y agenda de capacidades

Una lectura completa de la desigualdad en publicación requiere incorporar la otra cara del proceso: las revistas latinoamericanas también enfrentan barreras estructurales para consolidarse, profesionalizarse e integrarse en índices internacionales de prestigio. Esto es estratégico: si el campo educativo regional no cuenta con revistas fuertes y reconocidas —capaces de sostener estándares editoriales robustos y circulación internacional sin trasladar costos a la autoría— se refuerza la dependencia de circuitos centrales y se estrechan las vías legítimas de publicación para comunidades periféricas (Beigel, 2014; Vessuri et al., 2014).

Una parte significativa de las revistas latinoamericanas opera bajo modelos de acceso abierto no comercial, sostenidos por universidades o instituciones públicas. En ese marco se han identificado problemas recurrentes: recursos financieros limitados, equipos pequeños, profesionalización incompleta y dependencia de trabajo académico no remunerado (Cabrera & Saraiva, 2022; Packer, 2014; Rodrigues & Abadal, 2014). Esta fragilidad se vincula con la crítica de la ciencia lenta:

la edición se agrega a docencia, investigación y gestión, y desplaza cargas de tiempo hacia equipos reducidos, con efectos en la regularidad y la calidad del proceso editorial (Mountz et al., 2015; Packer, 2014).

La indexación en bases como Web of Science o Scopus suele exigir regularidad, revisión por pares robusta, políticas éticas, internacionalización de comités y autoría, visibilidad digital, metadatos estandarizados, DOI, preservación digital y, de forma creciente, capacidades tecnológicas asociadas a marcación y publicación en formatos interoperables (Rodrigues & Abadal, 2014; Espinoza Santeli et al., 2025). Para muchas revistas pequeñas o institucionales, sostener estos estándares demanda inversión técnica y capital humano especializado, recursos que no siempre están disponibles.

El inglés opera como lengua franca de la ciencia y, por tanto, como umbral de visibilidad internacional (Meneghini & Packer, 2007). Esto afecta tanto a la autoría como a las revistas que buscan ampliar circulación e impacto. Packer (2024), al analizar la colección SciELO Brasil, señala que la internacionalización y la publicación multilingüe tienden a elevar costos operativos (traducción, revisión lingüística, edición) y que, en algunos casos, ello empuja a adoptar esquemas de cobro para sostener dichos servicios.

Como ejemplo, existen revistas iberoamericanas bilingües que desagregan el costo de traducción como tarifa obligatoria comparable al APC, lo que muestra que el bilingüismo puede convertirse en una barrera económica adicional (Revista Latina de Comunicación Social, 2025). En América Latina se observa, además, un crecimiento de revistas que cobran por publicar: Córdoba González (2024) documenta —a partir de DOAJ y Latindex— un aumento de esta práctica entre 2021 y 2023, lo que tensiona la tradición regional de revistas “diamante” (sin cobros a lectoría ni autoría).

En este contexto, suele configurarse un circuito de retroalimentación negativa entre evaluación, migración de manuscritos hacia el exterior y debilitamiento de revistas locales. Cuando los sistemas de evaluación académica privilegian Q1/Q2 —a menudo asociados a índices comerciales y publicación en inglés— se incentiva que grupos consolidados envíen sus mejores manuscritos a circuitos “mainstream”, con menor flujo de artículos de alta calidad hacia revistas regionales. Esto puede afectar citación, prestigio y posibilidad de cumplir umbrales de indexación, reforzando la segmentación del campo científico (Beigel, 2014; Vessuri et al., 2014). En educación, donde la pertinencia local es central, este círculo debilita la capacidad regional para sostener revistas que articulen investigación, política pública, intervenciones educativas y formación docente.

En este sentido, se puede decir que la desigualdad en publicación puede concebirse como un ensamblaje que integra estructura del mercado editorial, regímenes de evaluación, condiciones institucionales de la autoría y la infraestructura editorial que hace posible la circulación del conocimiento. Ignorar la dimensión revista implica tratar como “individual” lo que, en realidad, es un problema de capacidades colectivas.

De ahí la premisa normativa del ensayo: si el problema es estructural, las respuestas también deben ser estructurales y operar en varios niveles. No se trata de abandonar Q1/Q2 como horizonte, sino de impedir que funcione como mecanismo de cierre territorial. La agenda propuesta se organiza en tres escalas —política pública (Secihti-SNII), gestión institucional (con énfasis en universidades estatales) y estrategias de carrera desde una ética de ciencia lenta— e incorpora un cuarto eje: fortalecimiento de revistas regionales.

En el plano de política pública, una vía es orientar instrumentos de financiamiento hacia consorcios multi-sitio en educación. Si parte de la investigación cuantitativa que busca ingresar a Q1/Q2 exige potencia estadística y participación de múltiples escuelas, conviene disponer de convocatorias que distribuyan costos entre instituciones (federales-estatales e inter-estatales) y amplíen el número de contextos incluidos. En la misma lógica, habilitar acceso gobernado a datos administrativos educativos —con resguardos éticos, anonimización y acuerdos de uso— puede disminuir costos de levantamiento (trayectorias escolares, asistencia, infraestructura, evaluaciones y movilidad) y democratizar capacidad analítica.

En el plano evaluativo, la orientación hacia evaluación responsable implica evitar el uso de cuartiles como sustituto de calidad individual, como advierten DORA y el Leiden Manifesto (DORA, 2012; Hicks et al., 2015). Bajo el marco Secihti-SNII, ello supone valorar el contenido del trabajo, reconocer productos relevantes para educación (bases de datos, instrumentos validados, informes de política, materiales de formación docente) y ponderar condiciones institucionales que afectan la producción.

En el plano editorial e institucional, la equidad territorial requiere fortalecer revistas y capacidades de publicación. Dado que muchas revistas regionales enfrentan barreras de profesionalización, indexación e internacionalización —incluidos costos de traducción y edición—, se requiere financiamiento y soporte técnico estable: formación de equipos editoriales, apoyo en estándares éticos, marcación y preservación digital, servicios compartidos de edición y traducción, y estrategias de visibilidad sin trasladar costos a la autoría (Cabrera & Saraiva, 2022; Espinoza Santeli et al., 2025; Packer, 2024; Córdoba González, 2024). Esta agenda se alinea con bibliodiversidad y ciencia abierta (FOLEC-CLACSO, 2021; UNESCO, 2021).

A nivel universitario, conviene institucionalizar unidades de apoyo a la escritura y a la publicación (revisión de estilo, traducción, acompañamiento ante dictámenes) y apoyo metodológico (estadística, multinivel, potencia), con prioridad para

universidades estatales; estas medidas pierden eficacia si no se acompañan de tiempo protegido (descarga docente, reconocimiento de horas de escritura y reducción de burocracia). La cooperación inter-estatal mediante redes temáticas, protocolos compartidos e instrumentos comunes puede habilitar diseños multi-sitio a menor costo, mientras que el reconocimiento del trabajo editorial y de arbitraje como parte de la infraestructura del conocimiento contribuye a reducir precarización y a sostener el ecosistema regional (Packer, 2014; Echeverri, 2025).

CONCLUSIONES

Las barreras para publicar en revistas Q1/Q2 en educación son, en buena medida, estructurales. No se reducen a una brecha de “habilidad” o “esfuerzo”, sino a la interacción entre economía política editorial (concentración y poder de *gatekeeping*), costos asociados a modelos de acceso abierto basados en APC, hegemonía del inglés, régimen de métricas y aceleración del trabajo académico. La combinación de estos factores produce un mapa desigual de quién puede investigar, escribir y circular en los canales de mayor prestigio (Larivière et al., 2015; Kwon, 2022; Mountz et al., 2015).

El argumento metodológico es clave: en educación, una parte del subcampo cuantitativo orientado a inferencia generalizable y modelación avanzada suele requerir muestras amplias, diseños multi-sitio y análisis multinivel, con justificación de potencia y atención al agrupamiento (ICC). Este estándar puede ser defendible desde el punto de vista científico para ciertas preguntas; no obstante, opera como filtro estructural cuando se exige sin reconocer que producir evidencia de esa escala depende de convenios, infraestructura, equipos y financiamiento (AERA, 2006; Maas & Hox, 2005; Hedges & Rhoads, 2010). En ese sentido, Q1/Q2 no funciona sólo como métrica: también como mecanismo de selección y exclusión institucional.

En México, la discusión se inserta en una reconfiguración institucional reciente: la Secihti encabeza el sector desde 2025 y el SNII opera bajo su órbita normativa. Esta gobernanza importa porque los dispositivos de evaluación producen incentivos que pueden reforzar el centralismo si no se acompañan de políticas de capacidad. La distinción entre universidades grandes/federales y universidades estatales evidencia una brecha material: acceso desigual a marcos muestrales amplios, redes multiinstitucionales, apoyo editorial y tiempo protegido. Exigir resultados homogéneos (publicación Q1/Q2) sin infraestructura diferenciada tiende a naturalizar desigualdades territoriales como “mérito”.

En América Latina, la comparación muestra que la tensión entre evaluación por métricas y diversidad de prácticas científicas atraviesa a la región. La noción de circuitos segmentados y periferia ayuda a comprender por qué la “corriente principal” no agota ni el valor científico ni el impacto social del conocimiento (Beigel, 2014). Las propuestas de bibliodiversidad y evaluación contextualizada (FOLEC–CLACSO, 2021), junto con los marcos de ciencia abierta (UNESCO, 2021), ofrecen rutas para equilibrar rigor, pertinencia y equidad.

Hay, además, un punto decisivo: la problemática alcanza el desarrollo de las propias revistas. Las revistas latinoamericanas enfrentan desafíos de sostenibilidad, profesionalización e indexación, así como presiones para publicar en inglés o en modalidad bilingüe, con costos de traducción y edición que pueden empujar a esquemas de cobro (Cabrera & Saraiva, 2022; Packer, 2024; Córdoba González, 2024). Por ello, la desigualdad en publicación no afecta sólo a “quién entra” como autoría; también define qué infraestructuras editoriales pueden consolidarse en la región como vías legítimas de circulación. Sin fortalecimiento de esa infraestructura, se profundiza la dependencia del circuito central y se reduce la pluralidad de rutas para producir y validar conocimiento educativo.

La agenda propuesta combina: (i) financiamiento para consorcios multi-sitio que permitan rigor a escala sin exigir capacidades individuales imposibles; (ii) acceso gobernado y ético a datos administrativos educativos para democratizar potencia analítica; (iii) evaluación responsable que evite usar cuartiles como sustituto de calidad y reconozca productos diversos y contextos institucionales (DORA, 2012; Hicks et al., 2015); y (iv) fortalecimiento de revistas regionales mediante apoyos técnicos, editoriales y lingüísticos, con reducción de la necesidad de trasladar costos a la autoría (Packer, 2024; Espinoza Santeli et al., 2025).

Creer como investigadora o investigador desde una universidad estatal no debería equivaler a “adaptarse” sin más a la aceleración y a la lógica de métricas. Desde la teoría del campo, ello implica disputar capital cultural (métodos, escritura, teoría), capital social (redes) y capital simbólico (prestigio) en un terreno donde el centro define qué cuenta como relevante (Bourdieu, 1986). La ciencia lenta recuerda que el tiempo es condición del pensamiento y que el valor humano de la educación —docencia, cuidado, responsabilidad territorial— no es un residuo: forma parte de la posibilidad misma de investigar con ética (Slow Science Academy, 2010; Stengers, 2018; Mountz et al., 2015).

Quedan, además, líneas de investigación abiertas. En primer lugar, el centralismo editorial y evaluativo plantea una pregunta de fondo: si los centros definen agendas, métricas y criterios de “relevancia”, ¿hasta qué punto las periferias quedan relegadas a proveer casos sin capacidad de producir teoría propia? (Beigel, 2014). En segundo lugar, cabe explorar cómo

reconocer impacto social y pertinencia territorial sin reducirlos a citación, en un entorno donde la digitalización multiplica la circulación, pero no garantiza reconocimiento evaluativo (Alperin, 2015; UNESCO, 2021). En tercer lugar, conviene examinar si una evaluación responsable puede redistribuir capital simbólico sin generar nuevos efectos perversos y qué combinaciones de métricas, evaluación cualitativa y reconocimiento de productos son viables en educación (Hicks et al., 2015). En cuarto lugar, persisten desafíos metodológicos: ¿qué diseños permiten sostener estándares robustos con restricciones reales (clusters limitados, convenios incompletos, tiempos acotados) sin caer en una "inferiorización" metodológica de lo local? (Hedges & Rhoads, 2010; Maas & Hox, 2005). Por último, en la dimensión editorial, se requiere indagar qué arreglos institucionales permitirían que revistas educativas latinoamericanas fortalezcan su profesionalización e internacionalización sin convertir el bilingüismo y sus costos en un nuevo mecanismo de exclusión (Packer, 2024; Córdoba González, 2024).

Ante lo expuesto, la desigualdad en publicación no se resuelve con exhortaciones a la productividad. Requiere reorganizar infraestructura, evaluación, tiempo académico e infraestructura editorial. La alternativa no es bajar estándares, sino redistribuir condiciones para que el rigor sea posible en más territorios y para que la investigación educativa, situada y humana, no sea penalizada por el mismo sistema que declara necesitarla.

REFERENCIAS

- Aguado-López, E., & Becerril-García, A. (2021). Performatividad en la ciencia mexicana: El dispositivo de evaluación del SNI. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 66(243), 19–53. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.243.76695>
- Alperin, J. P. (2015). The public impact of Latin America's approach to open access (Tesis doctoral). Stanford University. <https://stacks.stanford.edu/file/druid:jr256tk1194/AlperinDissertationFinalPublicImpact-augmented.pdf>
- Amano, T., Rios Rojas, C., Boum Il, Y., Calvo, M., & Misra, B. B. (2021). Ten tips for overcoming language barriers in science. *Nature Human Behaviour*, 5(9), 1119–1122. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01137-1>
- American Educational Research Association. (2006). Standards for reporting on empirical social science research in AERA publications. *Educational Researcher*, 35(6), 33–40. <https://www.aera.net/Publications/Journals/Educational-Researcher/Standards-for-Reporting-on-Empirical-Social-Science-Research-in-AERA-Publications>
- Beigel, F. (2014). Publishing from the periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET. *Current Sociology*, 62(5), 743–765. <https://doi.org/10.1177/0011392114533977>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1996). *La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza* (2da. Ed.). Distribuciones Fontamara.
- Cabrera, M., & Saraiva, I. (2022). Principales problemáticas de las publicaciones científicas: Un análisis en perspectiva latinoamericana. *E-Ciencias de la Información*, 12(1), 188–210. <https://doi.org/10.15517/eci.v12i1.46145>
- Clarivate. (2017, 13 de julio). The many flavors of the Journal Impact Factor. Clarivate Blog. <https://clarivate.com/academia-government/blog/many-flavors-journal-impact-factor/>
- Córdoba González, S. (2024). Cobrar por publicar (APC) en América Latina: Situación de las revistas en el 2023. *Discursos del Sur*, (13), 87–106. <https://doi.org/10.15381/dds.n13.28656>
- Declaration on Research Assessment. (2012). San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). <https://sfedora.org/>
- Diario Oficial de la Federación. (2023, 8 de mayo). Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación. <https://sidof.segob.gob.mx/notas/5688048>
- Diario Oficial de la Federación. (2024, 28 de noviembre). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. <https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5744005>
- Echeverri, D. (2025). Dificultades y limitaciones de las revistas científicas en América Latina. *Acta Médica Colombiana*, 50(Supl. 2), 1–7. <https://doi.org/10.36104/amc.2025.4796>
- Espinoza Santeli, G., Rivera Vásquez, J., & Lima Bandeira, M. (2025). Estrategias para la visibilidad y posicionamiento de revistas científicas en acceso abierto: Desafíos y oportunidades en América Latina. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 10(2), 35–46. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v10i2.7138>
- FOLEC–CLACSO. (2021). Herramienta 2: Para promover la bibliodiversidad y defender el multilingüismo. CLACSO. <https://www.clacso.org/herramienta-2-para-promover-la-bibliodiversidad-y-defender-el-multilinguismo/>
- Hanauer, D. I., & Englander, K. (2011). Quantifying the burden of writing research articles in a second language: Data from Mexican scientists. *Written Communication*, 28(4), 403–416. <https://doi.org/10.1177/0741088311420056>
- Hedges, L. V., & Rhoads, C. H. (2010). Statistical power analysis in education research. National Center for Special Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. <https://ies.ed.gov/ncser/pubs/20103006/pdf/20103006.pdf>
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520, 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
- Kwon, D. (2022, 16 de febrero). Open-access publishing fees deter researchers in the global south. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-00342-w>
- Larivière, V., Haustein, S., & Mongeon, P. (2015). The oligopoly of academic publishers in the digital era. *PLOS ONE*, 10(6), e0127502. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>
- Lillis, T., & Curry, M. J. (2010). *Academic writing in a global context: The politics and practices of publishing in English*. Routledge.

- Maas, C. J. M., & Hox, J. J. (2005). Sufficient sample sizes for multilevel modeling. *Methodology*, 1(3), 86–92. <https://doi.org/10.1027/1614-2241.1.3.86>
- Meneghini, R., & Packer, A. L. (2007). Is there science beyond English? *EMBO Reports*, 8(2), 112–116. <https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400906>
- Mountz, A., Bonds, A., Mansfield, B., Loyd, J., Hyndman, J., Walton-Roberts, M., Basu, R., Whitson, R., Hawkins, R., Hamilton, T., & Curran, W. (2015). For slow scholarship: A feminist politics of resistance through collective action in the neoliberal university. *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 14(4), 1235–1259. <https://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1058>
- Neff, M. W. (2018). Publication incentives undermine the utility of science: Ecological research in Mexico. *Science and Public Policy*, 45(2), 191–201. <https://doi.org/10.1093/scipol/scx054>
- Packer, A. L. (2014). A eclosão dos periódicos do Brasil e cenários para o seu porvir. *Educação e Pesquisa*, 40(2), 301–323. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022014000200002>
- Packer, A. L. (2024). Multilingualism in scientific literature communicated by journals from the SciELO Brazil collection. *European Review*, 32(S1), 124–144. <https://doi.org/10.1017/S1062798724000103>
- Revista Latina de Comunicación Social. (2025, 16 de mayo). Tarifas de publicación. <https://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/tarifas>
- Rodrigues, M. L., Abadal, E., de Araújo, B. L., & Oliveira, E. F. T. (2022). Article-processing charges as a barrier for science in low-to-middle income regions. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 117, e210395. <https://doi.org/10.1590/0074-02760210395>
- Rodrigues, R., & Abadal, E. (2014). Scientific journals in Ibero-American countries in Web of Science and Scopus. *Learned Publishing*, 27(1), 56–62. <https://doi.org/10.1087/20140109>
- Salager-Meyer, F. (2008). Scientific publishing in developing countries: Challenges for the future. *Journal of English for Academic Purposes*, 7(2), 121–132. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2008.03.009>
- Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2024, 31 de diciembre). Nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación entra en funciones. <https://secihti.mx/sala-de-prensa/nueva-secretaria-de-ciencia-humanidades-tecnologia-e-innovacion-entra-en-funciones/>
- Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2025, 4 de marzo). Acuerdo por el que se expide el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. *Diario Oficial de la Federación*. <https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5750802>
- Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (s. f.). Marco legal del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). <https://secihti.mx/sistema-nacional-de-investigadoras-e-investigadores/marco-legal/>
- Sinha, V. (2003). Decentring Social Sciences in Practice Through Individual Acts and Choices. *Current Sociology*, 51(1), 7–26. <https://doi.org/10.1177/0011392103051001778>
- Slow Science Academy. (2010). The Slow Science Manifesto. <http://slow-science.org/>
- Snijders, T. A. B. (2005). Power and sample size in multilevel linear models. En B. S. Everitt & D. C. Howell (Eds.), *Encyclopedia of statistics in behavioral science* (Vol. 3, pp. 1570–1573). Wiley. <https://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/PowerSampleSizeMultilevel.pdf>
- Stengers, I. (2011). Another science is possible! A plea for slow science. https://threerottenpotatoes.files.wordpress.com/2011/06/stengers2011_pleaslowscience.pdf
- Stengers, I. (2018). Another science is possible: A manifesto for slow science. Polity Press.
- UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. <https://www.unesco.org/en/open-science/about>
- Vessuri, H., Guédon, J.-C., & Cetto, A. M. (2014). Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development. *Current Sociology*, 62(5), 647–665. <https://doi.org/10.1177/0011392113512839>
- What Works Clearinghouse, Institute of Education Sciences, & U.S. Department of Education. (2020). What Works Clearinghouse Standards Handbook (Version 4.1). <https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks>.